

Año I

Marzo de 1934.

Revista de Derecho

SUMARIO.

Editorial.

Ética Profesional

Alfredo Larenas

Algo sobre las Acciones Judiciales

Humberto Bianchi V.

La Adhesión a la Apelación

Alberto Herrera Arrau

Sobre la Teoría del Reembargo

JURISPRUDENCIA.—*Sobre Aplicación del Código del Trabajo*

LIBROS Y REVISTAS

LEYES Y DECRETOS

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN - Chile

Alberto Herrera Arrau

Sobre la teoría del reembargo

**¿Pueden recaer dos embargos o más
sobre una misma cosa?**

HE aquí un punto que ha sido materia de innumerables debates en estrados y de amplia dilucidación en la cátedra y que, a pesar de ello, los tribunales no han podido todavía solucionar de un modo satisfactorio. Se echa de menos una fórmula teórica y un procedimiento práctico que evite los perjuicios de esta incertidumbre.

En las obligaciones de dar, cuando el objeto es una suma de dinero o una especie avaluada, el ejecutante puede embargar bienes suficientes del deudor para cubrir la deuda con sus intereses y costas, siempre que en el acto del requerimiento no se pague lo debido.

Si se trata de un sólo acreedor la tramitación del apremio seguirá hasta el remate sin mayores dificultades.

Pero si aparece otro acreedor con título ejecutivo y traba embargo sobre los mismos bienes ya embargados, pueden producirse situaciones graves que conviene analizar y prevenir.

El precepto fundamental que autoriza el pago compulsivo de las obligaciones personales se encuentra en el Código Civil y no en el de Procedimiento. Es el art. 2465, el primero del título de la Prelación de créditos.

Este artículo, que debería haberse insertado más bien al tratar del efecto de las obligaciones, establece una especie de derecho de prenda en favor del acreedor, sobre todos los bienes presentes o futuros del deudor, exceptuando solamente los no embargables que enumera el art. 467 del Proc. Civ., entre los cuales no figura la especie ya embargada.

Esta circunstancia de no prohibir el art. 467 de un modo expreso la nueva traba, ha servido de apoyo a la opinión, muy acreditada por lo demás, de que el segundo embargo puede hacerse válidamente.

También ha contribuido a ello el art. 2469 que faculta a los acreedores para exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de sus créditos, a fin de que con el producto se les satisfaga íntegramente o a prorrata.

Entre las disposiciones adjetivas que han reforzado este punto de vista, pueden citarse los arts. 550 y 551 del Cód. de Proc. Civ. Ambos se refieren a la acción del tercerista de prelación o de pago, cuando deduzcan sus demandas ante diverso tribunal.

Los partidarios de esta doctrina aceptan todas sus consecuencias sin titubear y llegan, por exigencias de la lógica, a admitir que la propiedad embargada puede adjudicarse al acreedor posterior (en el orden cronológico de los embargos, ya que se trata de créditos comunes), no obstante los gravámenes decretados en la primera.

Una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y otra de la de Talca, que tengo a la vista, así lo declaran.

Con todo la pluralidad de embargos puede acarrear trastornos gravísimos, hasta el extremo de producirse verdaderos "Impasses" que exigen toda la buena voluntad de los jueces y no poco ingenio en los abogados para solucionarlos.

Un caso, por vía de ejemplo.

El inmueble embargado en dos ejecuciones seguidas ante dos jueces distintos, se licitó por un tercero. Después de extendida la escritura de adjudicación y a fin de constituir su título, este

Sobre la teoría del reembargo

33

tercero pide que se alcen los gravámenes pendientes. El Juez ordena alzar el embargo trabado por su orden, pero se declara incompetente para levantar el que fué decretado por el otro Juez que no depende de su jurisdicción.

El interesado ocurre entonces ante ese otro juez solicitante que se alce el segundo embargo, petición que es rechazada en mérito de que el ocurrente no es parte en este segundo juicio y de que su gestión es incompatible con el derecho del acreedor que ante él litiga.

Tenemos entonces que este tercero que remató y pagó la propiedad, no puede obtener que se inscriba su título ni que se constituya legalmente su dominio.

Tampoco puede recurrir ante la Corte de Apelaciones porque ésta carece también de competencia para juzgar el caso, conforme al art. 67 de la Ley de Tribunales.

Ni el dinero consignado como precio le puede ser devuelto porque con él se hizo pago ya al acreedor y porque el contrato de compraventa quedó perfeccionado con la intervención del juez en representación del deudor en la escritura respectiva.

Ni puede iniciar acción resolutoria, porque ésta exige un juicio de muy lato conocimiento, y gastos incalculables.

Ni podrá transferir a terceros la cosa comprada, porque careciendo de todo derecho real sobre ella, no será válida la tradición que haga.

Ni el depositario que la tiene en custodia se la entregará a nadie, sin una orden terminante del juez de la segunda ejecución.

Además, la venta que se hiciera, envolvería objeto ilícito y sería nula de nulidad absoluta, conforme al N.º 3 del art. 1464 del Cód. Civil, por no haberse alzado oportunamente los gravámenes que sobre ella pesaban.

* * *

¿Qué hacer en tal situación?

La ley nada dice y los jueces un día resuelven una cosa y otro día otra.

Sin embargo, estimo que existe una solución razonable para la dificultad propuesta, y a la cual se puede llegar con un estudio más detenido de las disposiciones pertinentes.

* * *

Ya dijimos que nuestra ley procesal no contiene disposición alguna que prohíba de un modo expreso el reembolso, y, tanto de este silencio como de algunos preceptos substantivos referentes al pago forzado de las obligaciones, han deducido algunos que él puede hacerse sin mayores inconvenientes.

Pero, al lado de los razonamientos que ya hemos expuesto, existen otros de índole doctrinaria que permiten sustentar una opinión diversa.

Desde luego cabe decir que en nuestro Código no existe lo que podríamos llamar la verdadera noción jurídica del embargo. Está frecuentemente autorizado y reglamentado; pero en ninguna parte está definido.

Por ejemplo, el art. 465 dice: "El mandamiento de ejecución contendrá: ...La orden de *embargar* bienes del deudor en cantidad suficiente..."

El art. 470: "No designando el acreedor bienes para el *embargo*, se verificará éste en los que el deudor presente..."

El 472: "El *embargo* se entenderá hecho por la entrega real o simbólica de los bienes al depositario que se designe".

El 477: "Verificado el embargo el ministro ejecutor entregará inmediatamente la diligencia en la secretaria..."

En estos y en otros muchos artículos la ley habla del embargo como de un acto ya conocido, pero en ninguna parte puntualiza sus características ni su verdadero alcance jurídico.

Para el receptor que lo traba, no es sino una mera diligencia que estampa en los autos con su firma, ni más ni menos que una notificación o un requerimiento.

Y no debe extrañarnos esta omisión de nuestro Código, porque las legislaciones modernas, al revés de las antiguas, sólo aspiran a ser un conjunto de reglas prácticas, ajenas a toda digresión filosófica y a todo alarde literario. En éste influye también el hábito del lenguaje sobrio, sintético y riguroso que emplean los jurisconsultos de hoy y que antes era casi desconocido.

Sobre la teoría del reembargo

35

Nuestro Código Civil, con ser una obra de indiscutible mérito, está plagado de enjambres, definiciones farragosas (como la de las curatelas), pleonasmos y defectos de técnica, que no se encuentra en el Alemán, ni en el suizo, ni siquiera en el argentino.

Los que hayan leído las leyes españolas podrán apreciar con más conocimiento este fenómeno.

Para poder conocer, pues, el concepto jurídico del embargo, es necesario estudiarlo en los autores que se ocupan de esta materia, como Manresa, Mattiolo, Boitard, J. A. Rogron y otros.

D. Joaquín Escriche define el embargo diciendo que "es la ocupación, aprehensión o retención de bienes hecha con mandamiento de juez competente por razón de deuda o delito".

Partiendo de esta base podemos decir que el embargo es el acto por el cual el acreedor toma bienes del deudor a fin de satisfacer con ellos el crédito insoluto. Estos bienes quedan desde entonces afectos al pago de la obligación que se persigue en el juicio respectivo.

Ya no pueden enagenarse ni ser objeto de ningún contrato, porque en cierto modo tan salido del comercio humano y solamente pueden servir para el objeto que la ley ha previsto, es decir, para el pago de una obligación concreta, líquida y exigible.

Por este mismo motivo el segundo embargo, aunque la ley no lo diga, es inoficioso. Y lo es, no sólo porque los bienes han dejado de estar disponibles para los fines del art. 2465, sino porque la licitación de ellos en el nuevo juicio sería imposible conforme al art. 1464 que considera ilícitas esta clase de ventas.

Se arguye que el artículo 2469 permite que los acreedores valistas concurren al pago, realizando para ello todos los bienes del deudor; pero esta concurrencia establecida ahí en términos generales, debe hacerse sujetándose a las reglas prescritas en el procedimiento.

Supongamos que después de iniciada una ejecución por un acreedor sin privilegio y después de embargado el único bien que éste posee, aparece otro acreedor de la misma categoría, ¿estará forzosamente obligado a embargar la misma cosa ya embargada para pagarse con su producido?

—Nó; dicen los impugnadores del reembolso, porque la segunda traba es improcedente y de efectos totalmente nulos.

—¿Tendrá entonces que conformarse este segundo acreedor con perder sus derechos y la única oportunidad de reclamarlos, por la sola circunstancia de que otro se adelantó a ejecutar, y no obstante ser su crédito del mismo grado?

—Tampoco, porque la ley concede acciones especiales para estos casos, las que pueden encontrarse en el Tit. I, párrafo III del Libro III del Cód. de Procedimiento Civil. El art. 540 establece tres clases de tercerías :la de dominio, la de prelación y la de pago. Arranca su derecho el tercerista de dominio del derecho mismo de propiedad, del cual no puede ser privado sino por sentencia dictada en pleito en que ha sido parte. El tercerista de prelación se apoya en la ley que privilegia ciertos créditos con preferencia a otros de inferior categoría.

El tercerista de pago deriva su derecho del art. 2469 a que nos acabamos de referir.

Puede entonces el segundo acreedor exigir el pago de su crédito deduciendo una tercería en forma de incidente, siempre que tenga en su favor un fallo que declare su derecho.

Puede ocurrir que el segundo acreedor al iniciar su demanda ante otro tribunal embargue la misma especie ya embargada, creyendo garantizarse con ello; pero ya hemos dicho que esto es inútil e ilegal.

¿Qué deberá hacer entonces? Muy sencillo. El art. 550 lo faculta para pedir que se oficie al juez de la primera ejecución a fin de que "retenga" de los bienes embargados la cuota que proporcionalmente le corresponda, una vez que se realicen.

Refuerza aun más las precauciones el art. siguiente y concede a ambos acreedores la facultad recíproca de intervenir como coadyuvantes en las ejecuciones que siguen uno y otro, para vigilar su tramitación en vista del interés que debe suponerseles.

Esta facultad que ha sido considerada por algunas Cortes como una autorización implícita del reembolso, bien mirado no lo es, porque la ley no supone en el caso del art. 551 que la cosa embargada por el primer acreedor lo haya sido también por el segundo. Lo que dispone es que el tercerista puede intervenir

Sobre la teoría del reembolso

37

como coadyuvante en la realización de los bienes embargados por el primer acreedor, y que éste puede a su vez intervenir con las mismas facultades (con las de coadyuvante) en la segunda ejecución.

Claro se vé que la vigilancia del primer acreedor no puede referirse a la realización de los bienes, ya que no habiendo podido embargarse éstos en el segundo juicio, mal podrían rematarse en él.

En una palabra, la facultad del tercerista se refiere a la tramitación y a la realización de las especies; y la del acreedor -ejecutante sólo puede referirse a la primera y no a la segunda.

—Pero si el tercerista no puede iniciar vía del apremio, será entonces inútil su instancia?

—Nó; porque una vez dictada la sentencia en el cuaderno ejecutivo, el segundo acreedor tendrá el derecho de solicitar la reserva de la cuota proporcional a que puede optar según el art. 549.

Ejecutoriadas ambas sentencias, el pago se hará a prorrata en atención a que los concurrentes son quirografarios. Si no lo fueran, se pagarán conforme al privilegio de que gocen.

* * *

La antigua opinión de los jueces fundada en los artículos 2465 y 2469 del Código Civil, concordantes con los artículos 550 y 551 del Código de Procedimiento Civil en orden al embargo múltiple, ha ido modificándose poco a poco a medida que el estudio razonado de la materia ha permitido subsanar la deficiencia doctrinaria y la sensible obscuridad de los preceptos.

Posteriormente a las sentencias de las Cortes de Talca y Valparaíso, en las cuales los magistrados que las subscriben admiten sin reservas la teoría del reembolso, no han dictado otras resoluciones que, partiendo de principios diversos, llegan a conclusiones más en armonía con el sentido general de la legislación.

A la I. Corte de Concepción le ha correspondido el honor de alterar la jurisprudencia sentada desde muy antiguo sobre este punto. En un expediente ejecutivo seguido por el Banco de Chile con Anselmo Lagos se resolvió por sentencia de fecha 22

de Septiembre de 1918 que el único derecho que tienen los segundos acreedores es el que les otorga el art. 550 del P. C. y que en consecuencia el embargo posterior trabado sin alzar el primero, no está permitido por la ley a causa de que él no conduce a ningún fin jurídico práctico.

Transcribe en seguida los considerandos pertinentes:

“3.—que a virtud del embargo llevado a efecto en la ejecución a que se hace referencia en el primer considerando el mencionado fundo Santa Rosa quedó sujeto a la jurisdicción del juez letrado de Marilúán, ya que este funcionario era el único competente para decretar lo que con esa propiedad se relacionara en cuanto al alzamiento del embargo, o a la enagenación del mismo para el pago de la deuda.

4.—que perfeccionado el primer embargo con la entrega del fundo Santa Rosa hecha al depositario, no puede haber disposición o enagenación relativa a dicho bien sin autorización del juez que decretó y ordenó llevar a efecto dicho embargo, conforme a lo dispuesto en el N.º 3.º del art. 1464 del Código Civil.

5.—que esta conclusión se halla corroborada con la que dispone el art. 549 del Código de Procedimiento Civil, que preve el caso de la concurrencia de un segundo acreedor que pretende ante otro juez hacerse pago con bienes ya embargados en una ejecución anterior”.

Como puede verse, en este fallo se consigna la doctrina de que las cosas embargadas caen bajo la jurisdicción del juez que primero decretó el embargo y sólo él puede disponer de ellas para realizarlas y hacer pago al acreedor con su producido. Éste es indudablemente el juez a que se refiere el N.º 3.º del art. 1464. Los términos en que está concebido este art. limitan también a uno solo el número de embargos. Si no fuera así la licitación no podría hacerse nunca válidamente conforme al art. 1464, porque en el momento de celebrarse ella en cualquiera de los dos juicios que suponemos en tramitación paralela, estaría pendiente el embargo trabado en el otro.

De esto se deduce “in limine” que el único juez que la ley considera para estos efectos es aquél por cuya orden se trabó el primer embargo y que, por lo tanto, los demás gravámenes

Sobre la teoría del reembargo

39

posteriores son ineficaces, no sólo porque pugnan con los principios ya expuestos, sino porque la acción del segundo acreedor debe interponerse conforme al art. 550 y seguirse por los trámites de la tercera.

* * *

La sentencia dictada por la I. Corte de Concepción en el juicio seguido por el Banco de Chile contra Anselmo Lagos y de que ya nos ocupamos, estableció de un modo preciso el concepto jurídico del embargo y fijó los derechos que, en cuanto a pago forzado, competen a los demás acreedores de plazo vencido.

Sintetizando esta doctrina, que por lo demás, se encuentra de acuerdo con la que sustentan los tratadistas de Derecho Procesal, podemos decir que el *embargo* es la *aprehensión compulsiva* que el juez de la causa hace de determinados bienes del deudor con el propósito de enagenarlos y hacer pago al acreedor con su producido.

Lógicamente se deduce de este principio que desde el momento en que el embargo se verifica conforme a la ley, los bienes sobre que recae quedan jurídicamente sujetos a la autoridad del juez de la causa y preferentemente afectos a los derechos que el acreedor ejercita, sin que sea, por tanto, lícito embargar los mismos bienes por decreto de una autoridad distinta dictado en otro juicio, y mucho menos si ese juicio se ha seguido contra el deudor ya ejecutado.

En estos casos las acciones de los terceros quedan limitadas a las que concede el art. 540 del Cód. de Procedimiento Civil.

Siendo común el nuevo acreedor, tendrá la tercera de pago o "tercería de coadyuvante" como se llamaba en el derecho español antiguo pues hoy no existe en él.

Siendo privilegiado tendrá la de prelación o "de mejor derecho" como la llaman otros códigos.

Para saber si el tercero puede ser reintegrado en su crédito con preferencia al ejecutante, se estará a lo ordenado en el Código Civil sobre antelación o gradación de créditos concurrentes.

Si el segundo acreedor es de la tercera categoría, es decir, hipotecario, no tiene para qué accionar, porque conforme al art.

2428 debe ser notificado personalmente a fin de que comparezca al pago por su orden de inscripción. En caso de no ser citado en el término de emplazamiento, la hipoteca continuará vigente y en cualquier tiempo (dentro de los plazos de prescripción) podrá dirigirse por la vía del desposeimiento contra el nuevo dueño de la finca.

Puede ocurrir, sin embargo, que el juez por error o ignorancia ordene la cancelación de los gravámenes al hacer la adjudicación al rematante. En estos casos el hipotecario podrá siempre pedir que se reponga el gravamen, cancelándose la nueva inscripción.

Los jueces y los notarios deben proceder con sumo cuidado al resolver la petición de alzamiento formulada por el licitador porque de los perjuicios que origine un alzamiento inconsulto o precipitado, responden personalmente conforme al art. 96 del Reglamento del Registro Conservador y art. 159 y siguientes de la ley de 15 de Octubre de 1875. Los jueces deben exigir siempre un certificado de gravámenes, prohibiciones e interdicciones antes de dictar esas providencias.

En contra de la teoría del embargo único se han formulado numerosas objeciones, además de las que ya hemos expuesto. Se dice, por ejemplo, que ella importa en la práctica un peligro grave para los acreedores de buena fé, ya que un deudor inescrupuloso podría coludirse con un tercero para hacerse embargar todos sus bienes por deudas fingidas. Si se rechaza el reembolso, esta maniobra burlará a los verdaderos acreedores.

Desde luego, como fácilmente se comprende, este peligro no existe con respecto a los privilegiados e hipotecarios, quienes se pagarán preferentemente en todo caso, según las reglas ya estudiadas. El temor queda limitado a los valistas y éstos, ya lo hemos dicho, tendrán siempre el derecho de concurrir a prorrata, conforme al art. 550.

Pero aun así, se arguye, el verdadero acreedor resultará perjudicado en el concurso porque el pago que se le haga en el prorrateo no alcanzará a cubrir su obligación sino en parte.

Reconocemos que esto es efectivo; pero negamos que ello constituya una razón seria en favor del reembolso. Ese mismo peligro señalado existe en todos los actos jurídicos. Cualquier contrato puede simularse con fines dolosos. Una compraventa,

Sobre la teoría del reembargo

41

una donación, un arrendamiento, pueden esconder abusos inconfesables bajo una apariencia de legalidad. Pero, aparte de que existen recursos judiciales, criminales y civiles, para redargüir de falsos esos actos, no puede razonablemente decirse que ellos en sí mismos sean nocivos o peligrosos, independientemente de la mala fé de aquellas personas que son capaces de desnaturalizarlos con propósitos fraudulentos.

Creemos, pues, que tales argumentos casuistas no son bastantes para comprometer la solidez de los principios en que descansa la doctrina del embargo único.

* * *

—Una resolución de la mayor importancia es la que sobre esta materia dictó la Corte de Temuco el 15 de Julio de 1930, revocando un fallo de primera instancia en un juicio seguido por D. Arturo Cabezas Fostre con D. Miguel Luis Bravo, resolución que a mi juicio contiene la verdadera doctrina jurídica en esta importante cuestión.

Voy a reproducir aquí los considerandos de más interés, junto con la parte resolutive:

"6.º—Que el embargo, en derecho, es la exclusión del comercio humano de un bien determinado, y en el hecho, la entrega real o simbólica del mismo a un depositario; y su fin es el de someter dicho bien a la jurisdicción del juez que decreta su embargo, con el objeto preciso y determinado de hacer efectivo sobre el producto de su enagenación la obligación del deudor que ha motivado el juicio ejecutivo dentro del cual se ha trabado el embargo;

"7.º—de lo expuesto se deduce que una vez hecha la traba, es imposible en derecho y en el hecho proceder a efectuar un nuevo embargo sobre un mismo bien, porque lo que se encuentra actualmente excluido del comercio humano no es susceptible de una nueva exclusión; y porque un bien que real o simbólicamente (que jurídicamente produce el mismo efecto) se encuentra ya en poder de un depositario, no puede, sin enervar la administración que corresponde al depositario, ser puesto en poder de otro;

"8.º—que el procedimiento contrario, además de ser impracticable, invadiría la jurisdicción del juez que ya ha decretado el embargo, y lo que es más grave, enervaría (en proporciones que pueden llegar al infinito, según el grado de buena fé con que se actúe), el juicio ejecutivo, impidiendo llegar a su término natural, el cual es el de hacer pago al acreedor con el producto de la venta del bien que se ha embargado con ese objeto;

"9.º—que lo dicho no perjudica los intereses de terceros que puedan hacer valer derechos sobre el mismo bien, puesto que la ley sin perjudicar los efectos del embargo, determina la forma como esos terceros pueden hacer valer sus derechos.

Vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1464, N.º 3 del Cód. Civil y 465, 472, 473, 480, 501, 531, 532 y 533 del Cód. de Procedimiento Civil, se revoca la resolución apelada de fecha 20 de Mayo último, escrita a fs. 16 de este cuaderno y se declara que ha lugar a la incidencia formulada por la Sociedad Ferias del Sur a fs. 3 de este mismo cuaderno y que, en consecuencia, debe alzarse el embargo a que se refiere el primer considerando de este fallo, por haberse encontrado el bien sobre el cual se hizo efectivo, afecto precedente al embargo mencionado en el considerando 2.º del mismo".

Esta sentencia, que lleva el N.º 138, aparece en la Gaceta de 1930, segundo semestre, página 531.

De su texto se desprende que el Tribunal ha determinado en forma muy precisa el concepto de embargo, fijando su alcance y las consecuencias directas e indirectas que él produce dentro de la ley civil y procesal.

Ahora bien, si por juicio ejecutivo debemos entender el procedimiento que se emplea a instancias de un acreedor contra su deudor moroso para exigirle coactivamente el pago de lo que le debe en virtud de documento indubitado, es claro que este derecho debe ser protegido por la ley en forma que su ejercicio no pueda obstaculizarse por obra de terceros.

Hecha, entonces, la traba en bienes determinados éstos quedan desde ese instante preferentemente afectos al pago de la obligación que se persigue y salen del comercio humano, no

Sobre la teoría del reembargo

43

pudiendo ya dárseles otro destino. Al permitirse un nuevo embargo, como dice la Corte de Temuco, en el considerando 7.º habrá que destinar a dos objetos distintos, un mismo bien, excluyéndolo dos veces del comercio, lo que es un absurdo.

Además, la administración de esos bienes por el depositario nombrado, hace imposible la intervención simultánea y excluyente de otra persona en el mismo depósito. Imaginémonos que conforme al art. 466 del Cód. de Proc. Civil se hubiere embargado un establecimiento industrial o simplemente un inmueble dado en arrendamiento. El depositario en el primer caso tendrá las facultades de interventor judicial y en el segundo podrá percibir las rentas a objeto de destinarlas a la cancelación del crédito que se cobra. Si hay un solo depositario, esto no ofrece dificultad; pero hay varios, es imposible que todos puedan ejercer sus funciones regularmente. Si se supone que todos tienen derecho a recaudar las rentas, ¿en qué porporciones lo hará cada uno? La ley no lo dice y este silencio se explica porque en ninguna de sus disposiciones ha admitido la posibilidad de que haya dos depositarios representando a distintos acreedores.

Igual cosa puede decirse de la jurisdicción del juez que conoce del primer juicio ejecutivo, que se vería entrabada por la jurisdicción del Juez del segundo juicio. Ambos tendrían potestad sobre los mismos bienes para liquidarlos con fines opuestos, dictando resoluciones que con la mayor frecuencia se harían fuego por estar dirigidas a proteger intereses incompatibles.

Por último, la sentencia en estudio establece que el embargo trabado no perjudica a los demás acreedores, ya que éstos pueden hacer valer sus derechos sobre el mismo bien (no habiendo otros en el patrimonio del deudor) en la misma forma que la ley determina, es decir, solicitando la medida de retención que autoriza el art. 550 del Código de Procedimiento Civil, como ya dijimos más atrás.

Esta sentencia resuelve el problema que nos ocupa, en forma perfectamente justa y doctrinaria y señala rumbos ciertos a la Jurisprudencia.

Por desgracia parece que, junto con pronunciarse, la Corte de Temuco dictó un auto acordado que contiene instrucciones de orden general a los Conservadores de bienes raíces, prohibiéndoles inscribir en sus registros dos o más embargos sucesivos.

La Corte Suprema, posteriormente, al conocer de un recurso de queja interpuesto por D. Romilio Muñoz dictó la sentencia que aparece en la Gaceta de 1931, primer semestre, pág. 154, N.º 25, de 18 de Mayo de ese año, en la cual haciendo uso de las facultades que le confieren los artículos 86 de la Constitución Política y 108 de la ley de 15 de Octubre de 1875, dejó sin efecto dicho auto acordado por razones que son obvias y que no hay para qué consignar aquí.

Pera la sentencia misma que declara la nulidad del segundo embargo en el juicio seguido por D. Arturo Cabezas Foster con don Miguel Luis Bravo, a que nos hemos referido, no fué materia de ningún recurso que sepamos, encontrándose por lo tanto ejecutoriada.

Es ésta, pues, la última palabra pronunciada por la Justicia chilena sobre este oscuro tópico procesal y ella, como se vé, autoriza ampliamente y refuerza las opiniones que hemos venido sustentando al través de este estudio.

Antes de terminar, hacemos votos porque los jueces, inspirándose en principios de alta justicia y en motivos de verdadera conveniencia social, adopten la solución que les ofrece la Corte de Temuco en la sentencia comentada, uniformando sus resoluciones y fijando normas definitivas y claras para suprimir las dificultades que hoy día se oponen a la correcta y expedita tramitación de los juicios.

ALBERTO HERRERA ARRAU.